

Agenda Pública

Laura Ballarín, eurodiputada: "El 30% de los ingresos de las redes sociales viene de publicidad dirigida a menores"

Agenda Pública, 6 de febrero de 2026.

Laura Ballarín es la diputada que, en el Parlamento Europeo y por el Grupo de la Alianza de Socialistas y Demócratas, lidera la agenda digital española en Europa. En esta entrevista con 'Agenda Pública' analiza la propuesta de España de restringir el uso de redes sociales a menores de dieciséis años. Asegura que el país se pone en línea con los socios europeos que "han querido ser más ambiciosos" en materia digital y recuerda que estas políticas están en sintonía con lo aprobado en la Eurocámara.

España se ha convertido en el epicentro del debate sobre política digital. Tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez de restringir el uso de redes sociales a menores de dieciséis años, las reacciones se sucedieron rápidamente: Elon Musk criticó al presidente, mientras Pável Dúrov, dueño de Telegram, envió un mensaje a los usuarios españoles cuestionando la medida. Sin embargo, la propuesta sigue la línea de países como Francia y Australia y respeta las directrices del Parlamento Europeo.

En este contexto, la eurodiputada [Laura Ballarín](#) lidera la conversación española en Europa. En entrevista con *Agenda Pública*, afirma que España "se sitúa a la vanguardia de los países que han querido ser más ambiciosos", recordando que las plataformas obtienen un 30% de sus ingresos globales de publicidad dirigida a menores.

La discusión también tiene un trasfondo geopolítico. Ballarín advierte que "la dependencia tecnológica de Europa respecto a Estados Unidos es más evidente que nunca" y subraya la necesidad de autonomía digital, reforzar las democracias y responder a estas presiones. Para ella, "no se trata de censura, sino de reivindicar autonomía digital y democrática".

¿Cuál es el posicionamiento del Parlamento Europeo en materia de redes sociales y menores de edad? Ustedes manejan gran cantidad de evidencias y llevan tiempo valorando medidas en este ámbito.

La propuesta que hemos elaborado en el Parlamento Europeo plantea restricciones: prohibir el acceso a redes sociales y también incluir herramientas de IA y otras plataformas digitales que sean dañinas para los menores. Para los menores de trece años, prohibición total. Entre trece y dieciséis años, una horquilla: en algunos casos con autorización parental y, en otros, previsión o restricción completa.

España, con estas medidas, se sitúa a la vanguardia de los países que han querido ser más ambiciosos. Lo vimos con Australia, con Dinamarca, con Francia y ahora España se suma poniendo un año más: Francia y Dinamarca lo han hecho con quince y nosotros con dieciséis.

Desde el Parlamento Europeo nos hemos basado en datos: tanto en los datos de la Comisión del [Digital Fairness Fitness Check](#) como de la OMS. Ahí se detecta que alrededor del 12% de menores que usan redes sociales muestran mucho malestar y comportamientos muy disruptivos. Uno de cada diez jóvenes sufre ciberacoso y una de cada tres parejas tienen comportamientos de violencia digital. Eso a nivel europeo.

Y luego, en España, hay otras evidencias, como el informe de Infancia Digital que se presentó hace poco —hecho por Red.es— y que valida muchos de estos datos. Los propios extrabajadores de estas compañías nos han contado de primera mano cómo el modelo de negocio está basado en captar la atención lo máximo posible. Se quiere vender esa atención y esos datos a empresas publicitarias y generar ingresos millonarios.

Hablamos de los miles de millones de euros que generan las redes sociales y plataformas de vídeo, porque también ahí tuvimos a Snapchat, TikTok, YouTube o X, con publicidad segmentada a menores. En teoría está prohibido tener una cuenta en Instagram a menores de trece años, pero la evidencia demuestra que es posible porque no hay restricción ni verificación de edad. Y eso lo usan para tener ingresos millonarios. De hecho, de media, el 30% de sus ingresos globales dependen de la publicidad de menores. Con lo cual, estamos viendo que no es un daño colateral: la tecnología no es neutra, está diseñada para tener este efecto. Desde el Parlamento y desde las instituciones vamos muy en línea. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, lo mencionó en el [debate del Estado de la Unión](#) y ahora se está trabajando en una herramienta de verificación de edad que pueda ser armonizada.

Es muy importante que la restricción de acceso vaya de la mano de una verificación de edad. La Comisión Europea está trabajando con seis países, España entre ellos, para tener una herramienta lista en los próximos meses. Necesitamos restricción de acceso y más verificación de edad, y que el mensaje a estas plataformas sea que la impunidad ha acabado. Y también es una respuesta a las familias, a los médicos y a los profesores que vienen pidiéndonos medidas concretas. De lo contrario, sienten que se enfrentan solos a este reto de poner coto al malestar que está generándose en nuestros menores. Por tanto, hablamos de proteger a los futuros ciudadanos europeos y de proteger a nuestras democracias.

Tras el anuncio de Pedro Sánchez, Elon Musk (dueño de X) y Pável Dúrov (dueño de Telegram), respondieron con dureza al presidente del Gobierno. ¿Qué explica la vehemencia de sus respuestas y su gran consternación?

Su reacción pone en evidencia lo que está en juego y que, como digo, la tecnología no es neutra. Están en juego muchos millones de dólares y están en juego nuestras democracias y nuestra soberanía digital.

Por un lado, están los millones de dólares que generan. Europa es un territorio donde ganan mucho dinero: tenemos un mercado común con 450 millones de consumidores, potenciales usuarios de redes sociales. Meta, por ejemplo, obtiene el 25% de sus ingresos globales en Europa. Cuando desde Europa ponemos freno y limitaciones a esos ingresos, les molesta.

Por otro lado, está la idea de que las plataformas ya no son plazas públicas con una conversación cívica y neutral, o en igualdad de condiciones. Eso lo

pensábamos hace quince o veinte años. Se decía que las redes eran para conectarnos y hemos visto que nos han desconectado y fragmentado. Al final estamos adictos al scroll infinito: la "cocaína conductual", como lo llamó su creador. Pensamos que gracias a estas herramientas íbamos a estar muy informados y lo que hemos visto es que estamos más desinformados que nunca.

En otros ámbitos pasó algo parecido. El espacio marítimo o el aéreo no estaban regulados y llegó un momento en que se dijo "vamos a regularlo". En el espacio digital pasa igual: llega el momento en que decimos que esto no puede ser y que es preciso acabar con el salvajismo. No contemplamos todas las derivadas de una tecnología no neutral y ahora vemos que no son espacios neutrales ni plazas públicas. Hay una intención ideológica por parte de algunas plataformas de manipular la conversación pública para que sean vertederos de odio, manipulación y desinformación con una agenda política.

Si vemos las reacciones de los dueños de estas plataformas, ellos son muy claros: apoyan opciones dentro de la Unión Europea, sobre todo opciones de extrema derecha y autoritarias, que cuestionan nuestro modelo europeo y nuestras democracias. Cuando les pones coto, saltan, porque su agenda política es minar nuestras democracias. El gesto de España está alineado con frenar el "tecnogolpe". Estas plataformas han acumulado tanto dinero, datos e infraestructura que el poder casi se ha desplazado de los Estados a estas grandes compañías y hay que frenarlo.

Dentro de la batería de medidas del Gobierno, además del foco en los dieciséis años, está la posibilidad de hacer responsables a directivos de las redes sociales. La Comisión parece haberse desmarcado. ¿Se ha manejado esto en el Parlamento?

Es verdad que el portavoz de la Comisión se ha desmarcado un poco, pero desde el Parlamento, en el informe que elaboramos, ya pedíamos ir en esta línea. Se planteaba hacer legalmente responsables a dueños o altos directivos por el contenido que circula y, sobre todo, por no poner medidas suficientes para mitigar contenido dañino para menores.

En las medidas del Gobierno de España se habla más de manipulación algorítmica y discursos de odio. Yo creo que es muy parecido. En el caso de los menores lo vinculábamos con los artículos 34 y 35 de la Ley de Servicios Digitales [DSA].

No me parece que esté tan alejado. La DSA abrió el campo a hacer responsables legales a los dueños de las plataformas por el contenido que circula en ellas. Es una ley reciente y estamos viendo márgenes legales y cómo los países toman iniciativa. Francia lo está aplicando y hay jueces que están abriendo casos contra directivos de Meta y de X. Es ambicioso, pero está en la línea de lo que pedíamos.

Es importante dejar claro que quien no frena la diseminación de contenidos de odio, quien manipula algoritmos para que veas determinados discursos o contenidos, y quien tergiversa la conversación pública, es cómplice. Escudarse en que "son los usuarios los que lo cuelgan" no vale: lo vimos con el envío del mensaje de Telegram. Si llega un mensaje a todos los usuarios con un argumentario contra medidas del Gobierno de un país, es el ejemplo claro de que hay que ir por esta línea.

La presión de Estados Unidos puede ser un gran problema para Europa. ¿A qué riesgos reales nos enfrentamos? ¿Donald Trump usa a las empresas como un peón en su disputa con la Unión Europea?

Estamos en un momento en que la dependencia tecnológica de Europa respecto a Estados Unidos es más evidente que nunca. Un informe reciente del Parlamento Europeo sobre soberanía digital decía que más del 83% de los servicios tecnológicos que usamos en la Unión Europea provienen de fuera. Es una dependencia brutal.

Hablamos de centros de datos, infraestructura, servicios... Puedo poner un ejemplo a nivel de usuario para aterrizarlo: si desde Estados Unidos deciden cerrarnos el acceso a Gmail o a Google Fotos, el impacto sería global para millones de usuarios que perderían fotos y correos. A nivel de gobiernos, mucha de la infraestructura tecnológica que usamos viene de fuera y nos sitúa en un plano de vulnerabilidad que no es óptimo.

Que Trump lo haya verbalizado, y que use a grandes plataformas como acompañamiento del mensaje, es una forma de decirnos que somos dependientes y que pueden "desenchufarnos" cuando quieran. Esto debería hacernos ver la necesidad de actuar ya. Hemos perdido tiempo confiándonos en que los vínculos transatlánticos eran sólidos, con intereses comunes y valores compartidos. Trump rompe esquemas geopolíticos y quiere destrozar el tablero de juego desde 1945, el mundo basado en normas y el orden global liberal. Una consecuencia es esta.

La batalla que viene en los próximos años y décadas es la batalla digital. Nos hemos dormido en los laureles y ahora esta relación salta por los aires. Debería ser una llamada urgente a la acción: buscar alternativas, trabajar en autonomía digital, reforzar democracias y plantar cara a estos ataques. Intento ser realista, no pesimista y aunque es un toque de atención muy serio, me gustaría pensar que no hemos perdido el tren. Pero hay que darse más prisa.

Si hay un plan para evitar esta dependencia o empezar a deshacerla, ¿son estas medidas de control en redes sociales los primeros pasos? ¿Qué más se podría hacer en esta línea?

Sí, son los primeros pasos. Se está trabajando en paralelo para reforzar autonomía digital, tecnológica y de discurso, que son ramas de un mismo concepto.

Lo importante es reforzar nuestras empresas. Macron habla de campeones tecnológicos. La Comisión Europea prepara un plan para reforzar la contratación pública —que supone el 14% del PIB europeo—. También hay que reforzar el mercado único y eliminar barreras internas. Lo dijo Letta y aparece en diferentes informes: todavía hay demasiadas barreras legales para que nuestras *startups* tecnológicas crezcan. Si tienes una *startup* en Barcelona y quieres fusionarte con una holandesa para escalar, es complicado por regímenes legales diferentes. A nivel de Parlamento, debemos trabajar por un gran consenso político en estas medidas: tanto las de protección de menores como las de autonomía digital.

Por último, quiero mencionar a quienes critican estas medidas amparándose en una falsa libertad de expresión, diciendo que son censura. Esto no va de censura, va de reivindicar autonomía digital y democrática. Aquellos que lo

critican con esa excusa o no entienden nada o están legitimando la gran mentira masiva que se está instalando en nuestras sociedades, mientras las pudre por dentro. Hay que llamar al consenso político —que las grandes fuerzas proeuropeas lo tenemos—, y ahí se ve quién no está en esta batalla y a quién defiende: a sus amigos Trump, Telegram y, por extensión, Rusia.